

Récord de empleo en las empresas públicas en la legislatura de la crisis

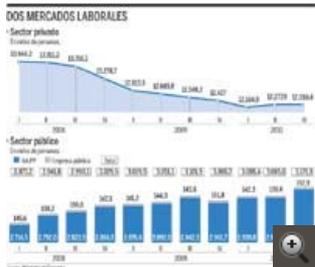


Expansión.com



06.12.2010 Estela S.Mazo

El dopaje de la economía a base de recursos del Estado beneficia a las compañías públicas, que tienen ahora más empleados que cuando comenzó la recesión.



Las perspectivas de empleo son, en general, negativas. Más allá de las encuestas que reflejan el escaso ánimo para contratar nuevos trabajadores, los pronósticos de paro apuntan a un mal momento para el mercado laboral: el consenso de analistas espera que la tasa de desempleo no baje del 20% ni siquiera el próximo año. Y es que la crisis ha arrasado con más de dos millones de empleos. Pero no todas las compañías viven la recesión por igual.

Es más: hay incluso beneficiadas. Es el caso de las empresas públicas, que contratan hoy a más gente que antes de la crisis, a pesar que en los diversos planes de ajuste presentados por el Ejecutivo no se haya tenido en cuenta esta cuestión. En concreto, en el segundo trimestre de 2008 había 138.200 empleados

públicos.

Más de dos años después, en el tercer trimestre de este ejercicio, sumaban 152.900, es decir, un 10,6% más (14.700 personas), según las cifras del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Es el máximo volumen desde 2007, con lo que marca un récord en la legislatura de la crisis.

En total, hay 2.347 empresas públicas, como cifra la Intervención General del Estado, cuyas poseedoras son el Estado central, las autonomías y los ayuntamientos.

Si a los datos de las empresas públicas se le suma el de los funcionarios de las propias Administraciones, se obtiene el número total de asalariados del sector público. Y la cifra también bate un hito: España ya tiene 3.175.900 funcionarios, un 8% más que al inicio de la crisis.

En el otro lado de la balanza, el número de asalariados de las empresas del sector privado desciende un 11,7%, al pasar de casi 14 millones a menos de 12,3 millones.

Es la dura radiografía de los dos años y medio de crisis. Los organismos internacionales ya habían criticado que España ha estado dopada por planes de estímulo a base de dinero público –como el Plan E, las líneas del ICO, el cheque bebé, el de 400 euros...–

Ahora, además, este cómputo conjunto muestra que la caída del empleo no ha sido mayor gracias a la anestesia de los trabajadores públicos. El dato de la Encuesta de Población Activa del tercer trimestre –que sacó a la luz la contratación de 90.000 funcionarios, salvando así el dato global– no ha hecho más que poner la guinda a un pastel que lleva 30 meses cocinándose.

Los planes de racionalización del sector público o de austeridad tampoco promete una solución, pues ya desde que llegó Solbes a la vicepresidencia económica en 2004 el Ejecutivo anunció que estrecharía el control a las empresas públicas. El motivo es que estos entes, tal y como denuncia incluso la OCDE, son usados por las administraciones para engrosar su deuda, escapando así de las exigencias presupuestarias.

Esa deuda, de hecho, no deja de crecer. El agujero de las compañías públicas suma ya 52.024 millones, muy lejos, demasiado, de los 35.964 del comienzo de la crisis. Es decir, que en dos años y medio ha crecido en más de 16.000 millones, un 44,6%. Por administraciones, la Central se lleva la palma con 27.327 millones; las comunidades acumulan 16.248 millones y las corporaciones locales, 8.449.

Las alertas

- Cuando llegó Solbes al Gobierno en 2004, aseguró que su equipo estrecharía el control a las empresas públicas.
- Seis años después, la vicepresidenta Elena Salgado se empeña en pedir transparencia al sector público.
- Los organismos internacionales han alertado del peligro: hay administraciones que usan esta vía para sortear la ley.
- Los ojos de Bruselas están sobre las arcas españolas, por lo que el control de estos entes se antoja ya imprescindible.

L< clave

Lo que más preocupa a los organismos internacionales es que la Administración utilice su sector público para desviar las deudas y así eludir las rigideces presupuestarias. Al final, esto se traduce en un aumento del gasto público.